

NUUEVA HORA

ORGANO DEL
PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO
DE LA ARGENTINA

1ª Quincena de SETIEMBRE de 1969
Año 2 — Nº 34 — PRECIO \$ 50,—

EDITORIAL

LA LUCHA OBRERA Y LAS MANIOBRAS

Una vez más, la poderosa clase obrera argentina fue capaz el día 27 de agosto de paralizar la actividad productiva de todo el país y mermar considerablemente las restantes actividades. Claro que salvo algunas manifestaciones y acciones en Rosario, Córdoba y La Plata no lograron cambiar el tono de "día franco" que la burocracia sindical le imprimiera. El Ministro Imaz pudo así calificarlo de "tranquilo", así como la policía cordobesa pudo pensar que había sido escuchada cuando exortó abrumadoramente al ciudadano cordobés a "parar o no parar según se lo dictara su conciencia de hombre libre, pero intimándolo conservar su tranquilidad no sumándose a las medidas de acción directa".

Es que desde Córdoba y desde mayo en adelante lo que preocupa a las clases dirigentes en Argentina no es la convocatoria a luchar o a un paro sino fundamentalmente cómo y para qué se para y se lucha.

Un paro que no adquiera características combativas y no desborde a las direcciones reformistas, puede ser tolerado y absorbido incluso por el mismo gobierno, en la medida en que se inscribe dentro de las "estrategias negociadoras" de las direcciones reformistas ante la contradicción de negociaciones de las paritarias, como necesidad de las direcciones reformistas y traidoras de afirmarse ante sus fuerzas obreras para permitirles encauzar y controlar y "representar" a las masas, trabajadoras.

Si la dictadura apresuró su "tiempo social" y si intenta cambiar de careta ante los reclamos populares o en la universidad ante los reclamos estudiantiles es porque en mayo-junio encontró una oposición dura, "a su imagen y semejanza" como la calificó la prensa burguesa. Si las direcciones conciliadoras pueden colocarse en la cresta de la ola de la indignación popular naturalmente el gobierno reformará la iniciativa y tratará de cerrar sus heridas.

LAS "CONCESIONES" DEL REGIMEN

De los cinco puntos del tímido petitorio elevado mansamente por los 20 al interventor Valentín Suárez —libertad a los presos gremiales, levantamiento del Estado de Sitio, devolución de los gremios intervenidos, aumento de emergencia sin especificar el monto, convocatoria a las paritarias, reincorporación de los cesantes por causas gremiales y devolución de la CGT— la dictadura procedió intentando malamente iniciar su nueva táctica de "dar cabida a las discrepancias" pero sin alterar en absoluto lo esencial de lo que queda de su política y mucho menos de su política económica.

Dejó en libertad a los gremialistas considerados no imprescindibles. Convocó a elecciones en algunos gremios donde dentro del diagramado plan de San Sebastián puede esperarse la instrumentación de direcciones serviles. Pero donde la dictadura mostró que ni siquiera es capaz de reconocer los favores de sus servidores en el movimiento obrero fue en la concesión de su anunciado tiempo social iniciado con la convocatoria a las paritarias. Ahora está claro de que se trata: aumento masivo del 6% aproximadamente y un 4%, como máximo a negociar dentro de las pautas establecidas por el Ministerio de Economía y si no hay acuerdo se impone el laudo oficial.

Para aventar la expectativa "aumentista" el informe de Economía ha hecho juegos malabarísticos con las cifras sobre el costo de la vida y aumento de salarios llegando a demostrar que el salario real por obrero tomado en conjunto tiene en 1969 igual nivel que en 1966 y casi insinuando que los aumen-

tos serán un anticipo para las futuras crecidas del costo de vida. Todo como si además de creer en los juegos estadísticos del Ministro Dagnino, los obreros argentinos hubiesen estado satisfechos con lo que los capitalistas le pagaban por su trabajo en 1966 y con la mayor explotación registrada en estos años (que el propio informe tiene que reconocer al hablar del aumento del número de horas trabajadas por obrero).

Es que además de la hipocresía de la ciencia burguesa la política de concentración de los monopolios desarrollada en las condiciones de nuestro país son muy estrictas y no dejan margen para la demagogia. Por ello la Bolsa de Comercio y la Unión Industrial claman al gobierno para que no se altere en nada el actual plan económico y la necesidad de no sacrificar, por asegurarse el apoyo de la burocracia sindical la prosperidad alcanzada por los monopolios en los felices años del tiempo económico.

Pero resulta que en este país ya todos saben que los años felices han incubado el polvorín que empezó a estallar. Y esta es la encrucijada de hierro para el régimen: obtener un basamento sindical propio, que le permita controlar los "desbordes sociales" provocados por la concentración monopolista que cimienta la acumulación del capital en la congelación de los salarios, aumentándose así la prestación de trabajo gratuito, que los capitalistas no pagan al obrero.

Es por ello que los comunistas revolucionarios sostenemos que la consigna de aumento de emergencia del 40% con salarios remunerativos por ocho horas de trabajo, apunta a los cimientos mismos de la dictadura burguesa terrateniente aliada al imperialismo; y es por eso también que esta consigna es omitida en el petitorio que los vanderistas elevaron a Valentín Suárez.

INSTRUMENTOS DE LA BURGUESIA

En la actual situación la burocracia sindical busca pilotear el descontento para rehacer su estrategia política: defenestrado Labanca y sus seguidores —punto de convergencia de algunos gremialistas que revistan en Azopardo y en el populismo— Lanusse parece imponerse transitoriamente a Onganía.

Al comandante en Jefe se atribuye precisamente la confección de un proyecto de "participación" de los obreros en la gestión de las empresas, claro está que por su paternidad burguesa, el proyecto tiende a acoplar un par de burócratas serviles en la mesa de decisiones de los patrones.

Hasta el viejo oligarca González Bergez se permite sugerir en el Ateneo Liberal Argentino, la "participación de los trabajadores en la administración de las empresas". Además reclama la vuelta al régimen de los partidos políticos, aunque —dice— sólo deberán subsistir unos pocos, verdaderamente arraigados en la población.

Este sería precisamente el plan político de Lanusse quien contempla la posibilidad de lograr por esta vía la inserción cómoda del peronismo en el sistema.

Y a estos enjuagues no es extraño el mismo Perón. En el frente de Azopardo se dibujan así dos líneas en relación a la política a seguir en el momento actual: el sector orientado por Roqué, hombre de la vieja guardiavanderista se inclina a afianzar la alianza con Onganía, exigiendo para la burocracia "dialoguista" una mayor influencia en el curso de la "Revolución Argentina".

Mientras tanto, la corriente que inspira Gazzera, ideólogo de las 62 organizaciones busca el acuerdo con Lanusse y se compromete con el llamado "golpe liberal desarrollista" que llegado el momento podría estallar en un "cordobazo controlado".

Esta postura alentada por Perón deposita su confianza en la perspectiva que ofrece al peronismo el juego de los partidos políticos, en el que esta fuerza se reserva el rol de oposición "nacional y popular" dentro del régimen, con el sustento del aparato sindical que hegemoniza.

De todos modos quienes siguiendo la ortodoxia vanderista buscan negociar con el gobierno desde posiciones de fuerza y quienes se embarcan en las aventuras golpistas de Lanusse y Aramburu buscan mantener las medidas de lucha como el paro del 27 y las que se avecinan dentro de los marcos y la forma que instrumenta la burguesía.

LA VOLUNTAD DE LUCHA

Es que asimilando la experiencia del 30 de mayo y del 1º de julio, paros exitosos ambos a pesar del boicot abierto o encubierto de vanderistas y participacionistas, la burocracia comprende que desde los sucesos de mayo y junio cada día más el sentimiento y la necesidad del proletariado y de las masas explotadas del país es uno solo: profundizar la lucha para derrocar a la dictadura en el camino de instaurar un gobierno Popular revolucionario.

Las ansias revolucionarias de las masas que a lo largo de tres años de "participación" y "diálogo" de los dirigentes traidores con la Dictadura, no tardarán en producir nuevos estallidos y enfrentamientos violentos, que, en la medida en que vayan elevando el nivel político y organizativo actual, minarán paulatinamente el poder de la dictadura y sus agentes en el movimiento obrero.

Por ello los vanderistas de todo pelaje no envidian la suerte corrida por los participacionistas descaídos como Alonso, Coria y Loholaberry que hoy no dirigen ni a su familia, por haber contrariado la voluntad de lucha de sus gremios.

En cuanto a Paseo Colón, la prisión de sus principales cuadros, entre ellos Onganía, agrava la anémica situación a la que fue conducida esa Central por la línea vacilante de una dirección reformista, que al no independizarse de las variantes ofrecidas por la oposición burguesa al gobierno no logró arrasar política ni organizativamente en el seno de las masas obreras. Situación de la que no parecen poder salir quienes no ven la necesidad de una política auténticamente clasista en Paseo Colón y siguen caracterizándola en bloque como "polo catalizador de todos los deseos contenidos de enfrentamiento al régimen y símbolo nacional de resistencia al mismo" como lo hace el PRT (combatiente).

Partiendo de esta situación general y de acuerdo a la justa consigna de no dar tregua y acosar a la dictadura, los comunistas revolucionarios sostenemos la necesidad imperiosa de no desaprovechar ninguna de las instancias de lucha que el actual momento político presente al movimiento obrero y popular.

El programa reivindicativo, insatisfecho de los trabajadores a la discusión de aumentos de salarios en las paritarias y fuera de ellas ofrecerán instancias para avivar la lucha de clases.

Hay que arrebatársela a la burocracia la iniciativa de que la justa lucha por los aumentos de salarios se transforme en prolongadas maniobras entre los dirigentes conciliadores, la patronal y el organiato en las amañadas paritarias convocadas despedazadamente a lo largo de 4 meses con los gremios más importantes rezagados para el diciembre festivo.

Para ello las nuevas medidas de lucha deben ser empuñadas directamente por las comisiones clandestinas, sin soplonos ni carneros, que vayan pasando a ser los organismos de dirección del movimiento obrero allí donde hayan sido creadas.

En esta dirección debe volcarse fundamentalmente el trabajo de las células del PCR incluso en el marco mismo de las discusiones de su Congreso, a riesgo de sacarlo a éste de la práctica leninista para transformarlo en un Congreso académico.

ALGO MAS SOBRE PERU

Dada la gran trascendencia que tienen los hechos que se suceden en Perú, y la diversidad de informaciones e interpretaciones que dificultan una visión objetiva, creemos de utilidad precisar con estadísticas y documentos algunos aspectos particularmente resonantes de la gestión de la Junta Militar. Constrainidos a sectores parciales todos estos datos deben computarse a la luz de la caracterización general del gobierno militar peruano que efectuáramos en el número anterior.

El 28 de julio, el presidente Velasco Alvarado habló por primera vez de la ideología de su régimen. Dijo que la revolución peruana no es marxista, sino nacionalista y revolucionaria; que respeta la propiedad privada, aunque no vino a defender el statu-quo tradicional; que se continuará por el camino de las reformas que incluiría, en la industria, una "participación" paulatina de los obreros en las ganancias. Desmintió categóricamente que las empresas se vayan a cooperativizar de la misma manera que las haciendas azucareras.

La reforma pesquera, tributaria y crediticia fueron enunciadas genéricamente en el mensaje presidencial, aunque sin precisar las medidas concretas que las implementarán.

Con referencia al desarrollo urbano del país, es preciso reiterar —dijo en otro pasaje de su discurso— que el Gobierno Revolucionario no contempla implementar una reforma urbana como inexacta e interesadamente se ha dicho en diversos círculos de opinión, ni mucho menos intenta desconocer el derecho a la propiedad privada de las viviendas.

En el plano internacional, planteó una típica doctrina tercerista ("éramos furgón de cola de las grandes potencias"). Pero lejos de ubicarse en posiciones antimperialistas, no fue más allá del "nuevo trato" que constituye actualmente la plataforma común del conjunto de los círculos dominantes latinoamericanos frente al imperialismo yanqui (CECLA, CIES, etc.): intercambio más equitativo, supresión de barreras arancelarias, y "racionalizar la necesaria inversión de capitales extranjeros en nuestro país". Este slogan de indudable filiación desarrollista —las inversiones extranjeras "necesarias" y "racionalizadas"—, impregna la mayor parte de las cuestiones económicas abordadas en el discurso: "El desarrollo latinoamericano —dijo más adelante— necesita capitales extranjeros. Pero esos capitales no viene por filantropía. A ellos también les conviene venir. Hay, por tanto, una conveniencia recíproca que debe ser clara y justamente normada en beneficio de ambas partes". Tampoco faltó el chantaje anticomunista: "Las tres medidas aquí planteadas representan la mejor solución al problema de una creciente pobreza generalizada, que puede tornar virtualmente inevitable la alternativa de otras formas de organización política, económica y social, que no deseamos, y cuya presencia en el actual

panorama latinoamericano, podría significar serio peligro para la unidad de todo el continente. De crearse condiciones que hicieran ineludible tal alternativa ello sería responsabilidad central de quienes, ciegos a la evidencia de los cambios sustanciales ocurridos en las últimas décadas, no saben comprender el nuevo rumbo del mundo y el nuevo sentido de la realidad americana".

Este fue también el espíritu de su referencia a las concesiones mineras, tema clave, sin duda, de sus relaciones con el imperialismo. La derecha esperaba que anunciara las concesiones; la izquierda que proclamara la nacionalización. La indefinición se mantuvo, pero dejando entrever intenciones que tranquilizan más a la derecha que a la izquierda, destacó "la positiva actitud de las empresas con las que estamos tratando", lo que valoró como "una clara prueba de la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en el futuro económico y político de nuestro país".

¿UN NUEVO MEXICO?

Todo esto no hace sino confirmar las grandes líneas del plan político y económico de la junta que analizáramos en el número anterior. El nacionalismo económico y el reformismo social. El nacionalismo económico y el reformismo social tienen justificación y límites dentro de ese objetivo de fondo que es aburguesar al Perú en lo económico (expansión industrial, ampliación del mercado interno), y "mejicanizarlo" en lo institucional a través del paternalismo estatal-militar y de un partido único que, como en el caso del PRI mexicano, garantice la hegemonía de la burguesía sobre las masas populares y asegure un periodo prolongado de paz interior. La alianza entre la Junta y la estructura partidaria de Acción Popular el partido de Belaúnde que ahora dirige el ex vicepresidente Edgardo Seoane, sentaría las bases para un "Partido de la Revolución" con apoyo de masas. Seoane, hoy fervoroso partidario de Velasco, es un rendido admirador de la experiencia mexicana. En su libro "Cartas y Hechos del proceso político 62-68", al hacer referencia a su designación como embajador en México en 1965 cargo que deseaba, dice: "Quería vivir en una nación que había realizado las transformaciones sociales que el Perú requiere para salir del sub-desarrollo. Se me brindó la oportunidad de estudiar, en el propio medio, la maravillosa experiencia mexicana: su revolución agraria, su política económica inspirada en el aprovechamiento de sus recursos naturales, su política bancaria y, en general, la intervención reguladora del Estado en todas las actividades económicas para orientarlas hacia el progreso de todos los mexicanos. Todas estas experiencias fueron descritas en mi libro 'El Ejemplo Mexicano' que publiqué en el Perú a fines de 1967".

EL PETROLEO

Valorar la significación objetiva de las medidas de la Junta que golpearon al imperialismo y la oligarquía, denunciar y combatir el chantaje imperialista es una cosa; hacer la apología de variantes burguesas paternalistas y populistas, otra muy distinta. Además de enclaustrar las miras irrenunciablemente revolucionarias de la clase obrera, tal posición, que en nuestro país difunden desde las corrientes populistas pequeño burguesas y el P. C. oportunista en el movimiento obrero hasta militares golpistas de nuevo y viejo cuño, alienta y oculta en lo inmediato, las limitaciones y dualidades que cada medida concreta tiene inevitablemente en el marco de una estrategia reformista burguesa. Así, por ejemplo, la expropiación de la IPC, y la firme actitud posterior del gobierno peruano frente al chantaje imperialista, no autorizan a sostener, como se hace a menudo, que el petróleo ha sido nacionalizado. La verdad de los hechos muestra que la expropiación de la IPC no tiene el alcance de una nacionalización del petróleo similar a la que se realizó en México e Irán, por la acción de Cárdenas y Mossadegh. La situación en cada una de las etapas de la industria petrolera es la siguiente: a) **Explotación.** Desde el 9 de octubre hasta la fecha se han entregado varios millones de hectáreas en concesiones otorgadas a empresas extranjeras, muchas de ellas integrantes, incluso, del grupo de la Standard Oil; b) **Explotación.** En 1968, la producción de petróleo de origen estatal representaba el 6,8 por ciento del total y la producción de las empresas extranjeras representaba el 93,2 %. Dentro de este último rubro la producción de la IPC representó el 20,5 %. De manera que la expropiación de los yacimientos de La Brea y Pariñas elevó la participación estatal al 27,3 % del total. El resto de la producción, o sea el 72,7 % continúa en manos de empresas extranjeras; c) **Destilación:** Las destilerías estatales, al 9 de octubre de 1968, elaboraban el 24,8 % del consumo. La expropiación de la refinería de Talara añadió a la parte estatal otro 66,1 %. For consiguiente, el 90,9 % de la destilación está en manos de la empresa estatal. Pero la significación de este hecho se ve disminuida por la circunstancia que, como no ha sido nacionalizada, la comercialización la participación estatal en las ventas sigue siendo del origen del 21,8 %. De tal manera, la destilería de Talara elabora subproductos con destino a ser comercializados por empresas privadas. Tal cosa ha estado ocurriendo, incluso con la IPC, desde el 9 de octubre de 1968.

Además, la ley de petróleo 11.780, que el propio enviado especial del gobierno peruano, Ramírez Novoa, calificó de "ley de la entrega", no ha sido aún derogada. Al amparo de esta ley, la Junta Militar ha otorgado nueve

concesiones a empresas extranjeras que cubren 2.505.404 hectáreas, sea una superficie 15 veces mayor que la expropiada a la IPC; ha otorgado permiso de reconocimiento geológico a las empresas Occidental, Texaco, Sullana y Peruvian Gulf Oil; prepara un llamado a licitación para otorgar concesiones en 1.000.000 de hectáreas dentro de los departamentos de Loreto y Huanuco. En cuanto a la nueva ley que se proyecta, cabe señalar que: a) se ha dicho oficialmente que se legislará para el futuro "... respetando, desde luego, aquellas concesiones que se otorgaron al amparo de leyes anteriores" (Diario "El Comercio", Lima, 27 de noviembre de 1968); y b) en lugar de nacionalizar la industria en todas sus etapas: exploración, explotación, destilación y comercialización, la nueva ley toleraría que "... tanto en la exploración como en la explotación de nuevas áreas podrán participar activamente las empresas extranjeras". (Declaraciones del ministro de Fomento al diario "El Comercio" de Lima, 27-11-68.). Si bien es cierto que desde entonces hubo un proceso de radicalización de la Junta, nadie ha rectificado hasta el momento esas declaraciones, ni hay elemento alguno que permita suponer que se ha abandonado la orientación que de ellas se desprende, totalmente reñida, desde luego, con una política consecuentemente nacionalista en materia petrolera.

Por el contrario, Velasco reiteró el 28 de julio que "la nueva legislación sobre hidrocarburos contendrá dispositivos destinados a estimular la concurrencia de capital privado en las etapas de exploración y explotación".

EL CAMINO BURGUES

En cuanto al proceso de industrialización que a emprendido la Junta, si bien por un lado golpea a la oligarquía y la obliga a aburguesarse (el 50 % de los bonos con que se indemnizará a los terratenientes expropiados por la Reforma Agraria puede ser convertido en acciones industriales), por otro lado, va a requerir mano de obra barata y una cuota sustancial de financiación externa, especialmente en la construcción de obras de infraestructura, que no existen prácticamente en Perú. De allí entonces que lo de la "participación obrera" no pase por ahora de ser un taparrabos de una política sindical esencialmente reaccionaria y antiobrera, y que en su relación con el imperialismo, el gobierno peruano exhiba, junto a actitudes decididas en el petróleo la pesca y el agro, otra mucho más contemporizadora en la minería, donde se concentra el 70 % de las inversiones yanquis.

Sobre las posibilidades de este camino de desarrollo burgués en la actual situación revolucionaria que vive América Latina, viene bien recordar lo que decía el diario "Granma", órgano del Partido Comunista Cubano, en un

UN DISCURSO ILUSTRATIVO

Con motivo del día de la Fuerza Aérea, el brigadier general J. Martínez Zubiría pronunció un discurso que ayuda a conocer las preocupaciones de la oligarquía burguesa-terrateniente con posterioridad a las jornadas de Mayo-Junio.

Propaganda a un lado, Martínez Zubiría expresó la honda inquietud de la oligarquía terrateniente por el hecho de que el poder de las clases dominantes carece del "consenso", dice él, para "establecer y apoyar —por encima de las ideas o egoísmos de partido o clase— definidas líneas de política y estrategias nacionales".

Las causas de esta situación, que corroe uno de los pilares esenciales de la dominación estatal de los monopolios, la oligarquía burguesa-terrateniente, y el gran capital, se deben, para M. Zubiría a las "diferencias en la interpretación de la realidad argentina".

Como se ve, el brigadier carece de toda profundidad en su análisis, confundiendo causa con efecto. Lo que no es nada extraño en quién atribuye las luchas de Mayo-Junio no a los fracasos sino "a los éxitos" de la llamada "Revolución Nacional".

Lo que inquieta al brigadier Zubiría es el drama que devela a los estrategas de la dictadura de Onganía. Esta está obligada a pilotear un proceso de concentración monopolista en un país dependiente, lo que exige que se apriete el cinturón a los obreros, y se fuer-

cen medidas de expoliación y expropiación económica de capas medias extendidas en la ciudad y el campo.

Lógicamente es muy difícil conseguir "consenso" popular para tamaños planes. Y se ahondan, al mismo tiempo, las diferencias y contradicciones entre las propias clases explotadoras, por cuanto se estrecha la base de privilegiados que sustenta el poder de las clases dominantes.

¡Cómo añora la oligarquía burguesa terrateniente, los años en los que sus abuelos transformaron a la Argentina en la granja de las metrópolis imperialistas, y capearon, con habilidad, la rebeldía obrera y de las capas medias! Esos años "de acelerado ritmo de crecimiento", como recuerda Martínez Zubiría.

El discurso de Martínez Zubiría da la clave para descifrar las idas y venidas de muchos militares y políticos burgueses. Y de no pocos dirigentes sindicales.

Así por ejemplo el defenestrado Gral. Labanca, según a trascendido procura impedir "el caos absoluto", o sea, una revolución. Para ello no ve nada mejor que un acuerdo de las FFAA con los gremios. Acuerdo que podría realizarse con o sin Onganía. Pero que requeriría, sí, depurar a esas Fuerzas Armadas de todo el generalato liberal.

Los militares "nacionalistas" que rodean a Labanca plantean realizar primero ciertas transformaciones (nacionalizar la banca, ligarse más es-

trechamente a los monopolios europeos, desarrollar la industria) acompañadas de un barniz "populista", para ir, luego, a elecciones.

Eso creen que evitaría el peligro de "soluciones políticas" cuyas trenzas, anudadas pacientemente por los estrategas de la burguesía, las desata luego la clase obrera de un sólo tirón.

Militares de la izquierda nacionalista burguesa apoyan esta salida. De allí que junto a dirigentes sindicales vanderistas hayan tirado del mismo carro golpista dirigentes sindicales de la izquierda del nacionalismo burgués.

Las paredes de los cuarteles guardan muchos misterios de la vida sindical argentina. Así fue como, en su momento, dirigentes sindicales vanderistas y ongaristas coincidieron en Córdoba el 17 de junio en levantar el acto en la Plaza Velez Sarsfield, para "evitar un enfrentamiento pueblo-ejército que sería funesto", como explicaron entonces, unos y otros, a sus partidarios.

Los liberales, en tanto, han convertido al Gral. Lanusse en su jefe militar y se inclinan cada vez más a hacer de Aramburu su caudillo político.

Propician una salida "neo-liberal" que permite el acople de los "nacionalistas-modernistas", del tipo de Frondizi o Reimundez.

Con algunas medidas de corte desarrollista, pero esencialmente a través de una agenda electoral creen posible lograr el "consenso" mínimo que

asegure tranquilidad a las clases dominantes para varios años.

Al tiempo que cada sector de esas clases busca una mejor reubicación en los controles del poder burgués-terrateniente, tienen una inquietud común: encontrar la salida "de fondo" sin choques intestinos que puedan conducir a una guerra civil. La lección del 62-63 está aún fresca. Por eso Labanca resigió posiciones sin lucha. Y por eso M. Zubiría alerta a liberales y nacionalistas para que lleguen a un entendimiento y no intenten prevalecer, por la fuerza, unos sobre otros.

Se vive un nuevo momento político. Las jornadas de Mayo-Junio no fueron una explosión aislada a la que ha de seguir un largo paréntesis sin lucha. Así lo prueban las luchas obreras actuales. Los comunistas revolucionarios bregaremos para acosar al poder de los monopolios, golpeados en Mayo-Junio, y organizar el combate obrero y popular y la fuerza revolucionaria que lo derribe.

En la perspectiva del combate liberador, que derribe a la dictadura y al régimen que representa, e instaure, a través de la insurrección armada, un poder popular revolucionario, la clase obrera, los estudiantes, los intelectuales, los campesinos pobres y medios y las otras capas populares, no deben dar tregua a la dictadura, y deben forjar, en la lucha contra ella, una sólida unidad revolucionaria.

ROSENDO IRUS

LOS REHENES DEL REGIMEN

Las libertades "dosificadas" acordadas recientemente por la dictadura responden en parte a la exigencia de la clase obrera y el pueblo para que se libere a todos los detenidos políticos y gremiales, se levante el Estado de sitio, y cese la persecución policial aunque en el carácter y alcance de esas libertades influye, de otro lado la necesidad de mejorar su capacidad de negociación con los burócratas de Azopardo, que utilizan para sus trenzas y componendas esta exigencia popular.

Las libertades "dosificadas" concedidas en estos días por la dictadura responden en lo fundamental a la necesidad de mejorar la capacidad de negociación del gobierno con los burócratas de Azopardo, y no expresan ni de lejos la exigencia de la clase obrera y el pueblo para que se libere a todos los detenidos políticos y gremiales, se levante el Estado de sitio, y cese la persecución policial.

El ministro Imaz, que no entiende de sutilezas le-

guleyas, declaró recientemente con un cinismo que lo pinta de cuerpo entero a él y a su clase, que sólo se tiene privadas de libertad a las personas absolutamente indispensables con motivo del estado de sitio, pero no se detiene por detener.

De acuerdo a la "Doctrina Imaz" permanecen en prisión los militantes sindicales y políticos "no negociables" en virtud de su trayectoria combativa, entre los que se cuentan gran cantidad de estudiantes y numerosos militantes del PCR.

Declaraciones como las de Imaz, o espectáculos como el de la Corte Suprema cesanteando y mandando reprimir al personal judicial; el de la policía que vuelve a detener a los presos que acababan de ser liberados, (como ocurrió en Ensenada), o el de los abogados que van a defender presos y son "encanados" a su vez; las torturas; los asesinatos de mayo-junio; no son producto de una histeria momentánea, sino que expresan el terror de las clases

dirigentes ante el nuevo nivel que han asumido las luchas obreras y populares.

En la lucha por un poder revolucionario, que elimine a través de la violencia popular, las estructuras que engendran y protegen la violencia y el crimen contra el pueblo, y como parte integrante de esa lucha, debe exigirse la liberación de los rehenes de la dictadura y el levantamiento del Estado de sitio. ¡Nada de gimoteos constitucionales ni "pacificadores"! ¡Basta de traficar con la libertad de los presos y la sangre de nuestros mártires para obtener las migajas de la dictadura! La bandera de la lucha contra la represión policíaca debe ser rescatada de los llorones y chantajistas, y pasar a las manos del pueblo revolucionario, de los que pelean, de los que están en la lucha sin concesiones contra la dictadura, el régimen que sirve, y los intereses que defiende.

artículo que, con el título de "Revolución Agraria y Subdesarrollo", se publicó el 26 de mayo (aniversario de la Ley de Reforma Agraria cubana) del año pasado: "...del mismo modo que ya no hay cabida para una revolución burguesa en el continente, tampoco hay cabida para una reforma agraria de corte burgués. Aun en el hipotético caso de producirse la eliminación de los latifundios, el reparto

de tierras la supresión de las formas de servidumbre que subsisten, esto ya no bastaría. Semejante reforma agraria no sería capaz de generar el potencial de recursos que requiere el desarrollo moderno. Ahora se trata de hacer una genuina revolución agraria. Porque para alcanzar un ritmo acelerado en la producción, para poner todas las tierras en cultivo, para imponerse a la naturaleza, para realizar

gigantescas inversiones y lograr el equipamiento técnico necesario, para formar cientos de miles de técnicos, hace falta mucho más que una simple ley antifeudal. Y esto sólo se logra si la revolución agraria va unida a la explotación de grandes extensiones de tierra, a la aplicación masiva de la técnica, con elevadas inversiones estatales; a la concentración de la economía agropecuaria y a su direc-

ción mediante planes globales que establezcan estrictamente las prioridades en el empleo de los recursos, dirigiéndolos en aquel propósito fundamental... El camino es uno: batir al subdesarrollo partiendo de la revolución en la agricultura y dentro del contexto de una revolución en marcha hacia el socialismo..."

MARIO SANCHEZ

LA LUCHA DE SWIFT EN BERISSO

El 20 de agosto, los 150 obreros de la sección Playa de Novillos del frigorífico Swift de Berisso, decidieron plantarse frente a una chanchada de la patronal que les privó de seguir utilizando como comedor un lugarcito que usaban los obreros dentro la misma sección. Inmediatamente paró toda la sección. La patronal —que saca experiencias de Rosario y no quiere lolas— responde echando 16 obreros de Playa y aprovecha la volada para despedir a otro que no era de Playa, pero que figuraba en su "lista negra". A esta altura, a la dirección del Sindicato le resulta imposible seguir desentendiéndose del asunto y ante la presión y la bronca de los compañeros de Playa, llama a una asamblea de la Sección a la que concurren 100 de los 150 obreros que allí trabajan.

El participacionista y "mutualista" Guana, secretario general del gremio, recita lo de siempre: los obreros tienen razón, sus reclamos son justos, pero hay que levantar el paro (que ya llevaba dos días) en la Sección, dejarlo todo en sus manos, y darle plazo hasta el lunes 25 para negociar con la patronal el levantamiento de los despidos. Entonces interviene un compañero de la Agrupación "La chaira" (formada al calor de la lucha), que plantea que Guana y toda su camarilla participacionista no representa a nadie, como se demostró el 1º de julio, cuando toda la fábrica paró a pesar de ellos y contra ellos; que por lo tanto, debía citarse a una asamblea de toda la fábrica para que decidiera la actitud a seguir, y propuso un paro de 48 horas en toda la empresa para extender la lucha y seguirla hasta la reincorporación de los despedidos y la obtención de las reivindicaciones de los compañeros de Playa de Novillos. Guana se puso histérico, bramó contra los activistas jóvenes, que serían todos una manga de descolgados, y aseguró que él y sus "viejos", expertos en trenzas y chanchillos, sabían cómo hacer las cosas. Otro compañero plantea: la negociación no sirve para nada, pero hay que hacer la experiencia. La votación la gana Guana, y obtiene cuatro días de "conciliación", al cabo de los cuales, se realizaría una nueva asamblea el martes 26 para resolver la actitud a seguir.

La intervención del compañero que en la asamblea de Playa acepta las negociaciones, pero sin ninguna confianza en ellas, es representativo del estado de espíritu del gremio de la carne en Berisso: desprestigio creciente y situación difícil de Guana, sobre todo después del 1º de julio, pero a la vez, incipiente de una alternativa clasista que encauce ese descontento y profundice el desborde de la dirección por los activistas. La agrupación clasista "La chaira", de reciente formación en Berisso (que jugó un papel combativo en el Lisandro de la Torre, y fue vanguardia de la reciente lucha en el Swift de Rosario), fue el único agrupamiento que se perfiló en esa dirección en este conflicto. Los trotskistas de "La Verdad" editaron un volante penoso y rastroso: llamaban a "sensibilizar" a la dirección sindical, y proponían limitar el paro a Playa, en lugar de extenderlo a toda la empresa.

Al cierre de esta edición, no había tenido lugar aún la asamblea. En los días previos la agrupación "La Chaira" había realizado agitación y pintadas en la zona, llamando no sólo a continuar el paro en Playa, sino extenderlo a toda la empresa y arrancar un Plan de Lucha desde las bases. El mismo día martes 26 en víspera del paro, se realizaba un acto conjunto de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y la CGT de Paseo Colón. La solidaridad militante del movimiento estudiantil con los huelguistas del Swift —apoyo en dinero, activistas estudiantiles en la puerta del frigorífico—, jugaba también un importante papel.

CORRESPONSAL

JUSTICIA NO TAN CIEGA

Las luchas que actualmente libra el personal judicial subalterno, por la demanda de un aumento de salarios proporcional al percibido por los magistrados ha alcanzado ribetes imprevisibles en el momento de su gestación.

El actual vendría a ser algo así como un segundo ciclo de una lucha que data de hace aproximadamente tres meses.

El comienzo de la misma, coincide con la decisión de un grupo de empleados de Tribunales, que interpreta la necesidad de crear una organización gremial combativa al margen de la desprestigiada e inepta sección de la UPCN que se atribuye la representación del personal de la Justicia.

La característica que permitió a la Interfueros pasar a ser la dirección efectiva y no ser destruida por amenaza de suspensión que pesaba sobre sus dirigentes, fue el saber combinar la necesidad de consultar las decisiones con el personal, con la indispensable clandestinidad en que la comisión debió desenvolverse.

De esta manera, se logró también un buen grado de ejecutividad y las medidas de lucha —trabajo a reglamento, paros parciales, etc.—, eran cumplidas unánimemente a pocas horas de haber sido resueltas.

El mes de agosto transcurrió en una situación de lucha casi permanente, habiéndose encontrado métodos de agitación idóneos para evitar la identificación de los activistas; los petardos estallaban incesantemente y las pastillas de "gamexane" que enraecían el ambiente, impedían el acceso a los juzgados los días de paro.

Es de destacar que la casi totalidad del personal participó en estas acciones, como así también en la impresión y distribución de los materiales y la propaganda que circuló durante la huelga.

Para debilitar este estado de ánimo, el Gobierno, utilizando como vocero a la Asociación de Magistrados, anunciaba hace dos semanas la inminencia de un aumento de salarios en el orden del 8%. Este aumento miserable sería confirmado oficialmente días más tarde.

Lejos de mellar el ánimo de la gente, estas migajas fueron tomadas como un desafío insultante que motivó la intensificación de las medidas de lucha; los paros desde las 15 horas en adelante fueron cotidianos y el "solemne" recinto de la justicia burguesa fue nuevamente sacudido por las estruendosas protestas del personal.

El conflicto de Tribunales ocupaba ahora la primera plana de los diarios y merecía la atención de los editorialistas de La Prensa y La Nación.

Claro está que tras el tímido apoyo a los "justos reclamos", se somete a crítica los métodos de lucha, esto es su esencia, invalidando así la lucha misma.

Entonces la misma Corte Suprema cuya función no ha sido otra que "legitimar" todas las aberraciones jurídicas nacidas en el onganato, se juega en defensa del régimen que la instituye adoptando medidas represivas con fines intimidatorios.

El 18 de agosto, eran cesanteados el Secretario y el personal de la Secretaría 151 del fuero de Instrucción, acusados por la Corte de guardar silencio acerca de la autoría del estallido de un petardo, presuntamente arrojados desde los ventanales de esa Secretaría. Pocos días antes de esa determinación, la Corte había dispuesto poner a todo el personal "en comisión".

La lucha adquiriría ahora nuevos contornos; a la demanda por aumentos salariales se añadía la exigencia del cese de las sanciones y el movimiento se enfrentaba cara a cara con la Dictadura, cuya re-

presentación más acabada en el Poder Judicial es la Corte Suprema.

Se resuelve realizar un paro de actividades a partir de las 15 hs. del jueves 21 con una posterior concentración en Plaza Lavalle.

Y aquí comienzan las vacilaciones de la Interfueros: ante la decisión de algunos sectores del fuero de Instrucción de no salir a la calle para facilitar las gestiones conciliatorias realizadas por la Cámara en lo Criminal ante la Corte, se pasa por alto la combatividad de la gente y la misma Interfueros se encarga de convencer al conjunto del personal de que la movilización callejera era inoportuna.

Así se entró en el juego de la derecha que trataba en todo momento de sustituir la lucha por la mediación "de magistrado a magistrado".

El paro del viernes 22, unánime al igual que los anteriores, encuentra a los huelguistas sin directivas concretas, sin consignas ni plan de lucha alguno. El desconcierto de la Interfueros contagia a las bases y el resultado es el siguiente: el personal más combativo y los cuadros surgidos a lo largo del proceso, comienzan a ver con escepticismo a una lucha que empezaba a diluirse, perdiendo la Interfueros en pocos días parte del prestigio que la encumbró en los meses anteriores.

Al desdibujarse otra alternativa, toman cuerpo las ideas conciliatorias siempre latentes en los trabajadores "de cuello duro".

Y en la expectativa creada por las tratativas tendientes a que la Corte reconsidere la sanción impuesta al personal de la Secretaría 151 se obnubilan los objetivos que dieron nacimiento a la lucha: la exigencia, de un aumento de salarios proporcional al percibido por los magistrados y el cese del estado "en comisión" que afecta a todos los empleados.

Pero la respuesta del régimen reconoce la existencia de una línea trazada con coherencia.

El día 23 anuncia que se descontará el 10% de los sueldos a quienes hubiesen acatado el cese de tareas del día anterior.

Frente a este nuevo arrebato represivo no se verifica un cambio de actitud en la Interfueros que permita reorganizar la lucha partiendo de la existencia de óptimas condiciones en la disposición del ánimo de los empleados.

Si todo se supedita a la revisión por parte de la Corte de las cesantías impuestas en Instrucción, y teniendo en cuenta que esa reconsideración aún no deja de ser posible, todo se agotaría alrededor de reivindicaciones surgidas en el transcurso de la lucha, pero que nada tienen que ver, aisladas, de los objetivos centrales por los que se combatió.

Además, el movimiento debe dejar de circunscribirse al ámbito judicial y coordinar su acción con otros sectores gremiales que estén plantados en la lucha antidictatorial y antimperialista.

Por otro lado, su enfrentamiento con la Corte debe profundizarse, denunciando que esa misma Corte avala hasta el momento el Estado de Sitio, y el consiguiente encarcelamiento de centenares de obreros estudiantes e intelectuales.

En síntesis, el curso actual de la lucha declinante respecto a sus primeros momentos, continuará debilitándose a menos que triunfe en Interfueros una línea de acción más combativa antidictatorial y antimperialista, que permita que el personal tome conciencia de su situación de asalariado, aunque el patrón sea el Estado y que en el accionar mancomunado con los demás sectores populares se vislumbre la salida que no proporcionan los burócratas ni los pelucones.

CORRESPONSAL